

4200000
Bogotá D.C.,

Señor
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO
secretaria@concejobogota.gov.co
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.
Calle 36 No. 28 A -41
Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 17-03-2022 01:25:19
2022ER4343 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: ALTA CONSEJERIA DE PAZ VICTIMAS/VLADIMIR RODRIGUEZ VAL
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/DUARTE CUADROS CARLOS ARTURO
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION NO. 102-2022
OBS: ---

Asunto: Proposición No. 102 de 2022, aprobada en Sesión Plenaria del 24 de Febrero de 2022.

Tema: Goce efectivo de los Derechos de las Víctimas, Paz, Reconciliación en Bogotá D.C

Respetado secretario

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación -en adelante ACPVR-SG- recibió su comunicación, mediante la cual remite el texto de la Proposición No.102 aprobada en Sesión Plenaria el día 24 de febrero de 2022, presentada por los concejales Cielo Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Carlos Carrillo Arenas, respecto de la cual se procede a dar respuesta de la siguiente manera:

1.- *Sírvase informar ¿De la batería de Indicadores del Goce Efectivos de los Derecho de las víctimas (IGED), establecidos por el Auto 116 de 2008 de la Corte Constitucional, cuantos son medidos anualmente por la Administración Distrital y sus entidades? ¿Cuál es la razón para no medir el resto?*

Para dar claridad a este punto y los siguientes del cuestionario, en primer lugar, es necesario dar un contexto de la competencia normativa respecto de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos-IGED-

Es importante mencionar que, los indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED) tiene un marco jurídico y jurisprudencial que inicia con la sentencia T-025 de 2004 en donde la Corte Constitucional identificó que teniendo en cuenta la multiplicidad de derechos constitucionales afectados por la situación de desplazamiento forzado presentada en el país, así como las circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentra la población desplazada, era necesario que las entidades del orden nacional establecieran indicadores para evaluar el impacto de los objetivos definidos en la política pública de atención al desplazamiento forzado, como una forma de hacer seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional –ECI-, en la materia.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



Mediante los autos 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008, la Corte Constitucional adoptó un conjunto de 174 indicadores obligatorios (38 indicadores de resultado, 60 indicadores complementarios y 76 asociados), considerados como suficientes, pertinentes y adecuados para medir el avance, estancamiento o retroceso en la superación del ECI y en la garantía del goce efectivo de 20 derechos de la población desplazada.

Posteriormente, mediante Auto 373 de 2016 la Corte Constitucional desarrolló una nueva valoración de la persistencia o de la superación del ECI y, además, hizo explícitos los aspectos de la política pública y los ejes analíticos a partir de los cuales se realizaría, en adelante, el seguimiento a la sentencia T-025 del 2004. En consecuencia, ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en adelante UARIV- y al Departamento Nacional de Planeación – en adelante DNP- identificar:

- (i) Las necesidades de capacidad institucional y administrativa; y
- (ii) Los ajustes a la batería de indicadores que consideraran adecuados para realizar un análisis comparativo de la situación de la población desplazada, en relación con el resto de colombianos y víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), teniendo en cuenta los motivos que condujeron a la declaratoria del ECI en 2004. Dicha información debería darse a conocer a las entidades territoriales.

Desde entonces la UARIV, con el apoyo del DPN, es la entidad encargada de determinar y ajustar tanto la batería de indicadores, así como los criterios de medición, de conformidad con los criterios presentados por los autos del Alto Tribunal Constitucional.

Asimismo, en el Auto 331 de 2019 la Corte Constitucional manifestó que los IGED tienen una función sustancial y una función instrumental, lo cual se encuentra asociado a la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la respectiva política pública, en virtud de esta función los IGED deben:

- (i) Fundamentarse en los derechos de la población desplazada.
- (ii) Dar cuenta de los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos.
- (iii) Permitir la determinación de la dimensión real de la demanda específica de la población desplazada a ser atendida a través de la política pública dispuesta para este fin, así como los componentes y medidas que se requieran implementar para garantizar sus derechos.
- (iv) Medir el cumplimiento de los fines, objetivos y resultados de la política pública y su contribución al goce efectivo de los derechos de la población desplazada, en cada componente y de acuerdo con las necesidades de los sujetos de especial protección constitucional.
- (v) Identificar estancamientos y retrocesos en los programas o componentes de atención a cargo de cada entidad.
- (vi) Ser usados como instrumentos para medir la efectividad de la política pública, con base en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada.

La función instrumental radica en que los IGED son el medio probatorio del grado de avance en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y la superación del ECI.

Ahora bien, en cuanto al desarrollo del marco normativo el Decreto 1084 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación), define los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos -IGED- como un mecanismo de seguimiento y evaluación (Artículo 2.2.8.3.8) de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, enfocados especialmente en la población víctima de desplazamiento forzado; así mismo señala que será la UARIV quien coordinará el sistema de seguimiento y evaluación de derechos de la población víctima:

“La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordinará un sistema integral de seguimiento y evaluación, el cual estará conformado por las herramientas que se presentan a continuación, y por las demás que considere convenientes...” En particular, en el numeral 5 hace referencia a los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de la Población Víctima: *“El Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, diseñarán y aplicarán una batería de indicadores de goce efectivo de los derechos de las víctimas, que darán a conocer a las entidades territoriales”*.

Respecto a las competencias de orden nacional, **las entidades responsables del diseño técnico de esta medición es el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad para la Atención a las Víctimas (UARIV); por lo anterior, la UARIV y el Ministerio de Interior operan conjuntamente el RUSICST**, el cual es mecanismo de información y seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades territoriales, en relación con la implementación de las políticas públicas y planes de acción de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas en favor de las víctimas.

Por otro lado, el Decreto 1084 de 2015, artículo 2.2.8.3.8, parágrafo 3, señala además que *“Las entidades territoriales deberán tener en cuenta los resultados de la medición de los indicadores de goce efectivo de derechos de las víctimas, realizadas por ellas mismas o por el Gobierno Nacional, al momento de elaborar o actualizar sus planes de desarrollo territorial y sus planes de acción.”*

A nivel Distrital, a través del Acuerdo 491 de 2012 se creó el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y se establecieron los lineamientos en el Distrito Capital para la formulación de la política pública a favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los tratados internacionales ratificados por Colombia y en la normatividad nacional. En el artículo séptimo de dicho acuerdo, se hace referencia a la implementación del Observatorio de las Víctimas del Conflicto Armado, con el fin de hacer seguimiento a la garantía de los derechos de las víctimas. Dicho Observatorio fue creado y reglamentado a través del Decreto Distrital 531 de 2015.

En el mismo sentido, el Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 587 de 2015, estipula que el gobierno Distrital debe: i) adoptar los IGED como parte de un sistema de seguimiento y evaluación a la política pública distrital de víctimas; ii) incluirlos dentro del Plan de Acción Distrital para la Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas – PAD -, adaptándolos a las realidades demográficas, socioculturales y económicas del Distrito, tomando como referencia la fórmula de cálculo adoptada por la Corte

Constitucional e incluir un enfoque diferencial; iii) disponer de mecanismos de interoperabilidad que permitan el monitoreo de datos relacionados con la batería de indicadores dentro del PAD y iv) publicar un documento que dé cuenta de la medición de los IGED para Bogotá, estipulando la coordinación metodológica a cargo de la Alta Consejería y la UARIV.

Ahora bien, es pertinente aclarar que según el artículo 3 del Acuerdo 587 de 2015, la Administración Distrital debe realizar seguimiento a la Política Pública Distrital de Víctimas, de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos IGED, **de acuerdo con la batería de medición que adopte la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV.** En concordancia con los deberes la ACPVR ha fortalecido el intercambio periódico de información con la Red Nacional de Información -RNI- de la UARIV y con el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas SDARIV, tomando como base la batería de indicadores diseñada por la Unidad.

Asimismo, ha diseñado los indicadores de seguimiento a las metas del PAD en línea con los componentes de la política pública, de manera que estos indicadores estén disponibles como insumo para la medición IGED en aquellos derechos en que el Distrito Capital tiene injerencia como entidad territorial y adaptándolos a la disponibilidad de información por parte de las entidades del SDARIV. Finalmente, la ACPVR ha publicado los resultados de la aplicación de la medición de los indicadores en el CDJT y en nuestra página Web en el primer trimestre de cada año y el final de la gestión del gobierno.

Expuesto este contexto de competencias, se procede a responder la primera pregunta.

El Auto 116 de 2008 de la Corte Constitucional, contemplaba los siguientes indicadores de medición:

1. Vivienda
2. Salud:
3. Educación
4. Alimentación
5. Generación de ingresos
6. Identidad
7. Indicador de estabilización económica
8. Derecho a la vida
9. Derecho a la integridad
10. Derecho a la libertad

Sin embargo, como se indicó, el artículo 3 del Acuerdo 587 de 2015, establece que la Administración Distrital debe realizar seguimiento a los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos IGED, de acuerdo con la batería de medición que adopte la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, por lo cual, al día de hoy, la baterías de indicadores medida en el último informe por la Administración Distrital corresponde a aquellos que según los criterios de la Unidad de Víctimas, han sido objeto de medición para atender los autos más recientes de la corte constitucional, y que corresponde a los siguientes:

1. Garantías de No Repetición
2. Derecho a la salud y rehabilitación
- 2.1. Aseguramiento en Salud

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



- 2.2. Rehabilitación - Atención Psicosocial
3. Derecho a la educación
4. Derecho a la Subsistencia Mínima
5. Derecho a Retornos y Reubicaciones
6. Derecho a la Restitución de Tierras y Protección de Predios
7. Derecho a la Vivienda
8. Derecho a la Indemnización Administrativa

Los anteriores indicadores fueron los calculados por el Observatorio Distrital de Víctimas, en el informe IGED 2020. (Anexo 1. Informe de medición de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado Localizadas en Bogotá– 2020).

De igual manera los indicadores de Alimentación, identidad y generación de ingresos fueron presentados en los boletines de Junio 2021 y Octubre 2020 mediante el seguimiento a la superación de vulnerabilidad realizado por la Red Nacional de Información. (Anexo 2. Boletín Trimestral de Víctimas (Abril-Mayo-Junio): Link de acceso: https://observatorio.victimasbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Boletin%20Trimestral%20Abril-Junio%202021_2.pdf y (Anexo 3. Boletín Víctimas Bogotá – Octubre 2020) Link de acceso: https://observatorio.victimasbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Boleti%C8%1n%20Vi%C8%1ctimas%20Bogota%CC%81%20%E2%80%93%20Octubre%202020_0_0.pdf

Respecto de la lista de indicadores del Auto 116 de 2008, es importante referir que la UARIV, revisa y de ser el caso actualiza la batería según los autos más recientes proferidos por la Corte Constitucional como parte al seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, y por ello, el listado contemplado en dicho auto ha variado en el tiempo, según los requerimientos u ordenes emitidas en los autos más recientes.

2. *Sírvase informar, ¿Cuál es el diagnóstico de la Alta Consejería sobre el estado de la medición de 2021 de los IGED? ¿Han mejorado los indicadores con respecto a las mediciones de la administración Distrital anterior?*

Bogotá D.C., como entidad territorial, ha realizado un esfuerzo administrativo y presupuestal por proveer coberturas universales en salud, educación y atención humanitaria en la etapa de inmediatez de conformidad con sus competencias. De igual manera, las fortalezas institucionales en Bogotá y la disposición de orientación y oferta en los Centros de Encuentro para la Paz y la Reintegración, donde se atiende a la población víctima, han permitido que los porcentajes de cumplimiento de la garantía de los derechos a la restitución de tierras y a los retornos y reubicaciones, se encuentren por encima del 70%, porcentaje superior al resultado de la medición de los indicadores de la Nación. En cuanto a las garantías de no repetición, el comportamiento de Bogotá es similar al de la Nación.

Por otro lado, a partir de los resultados expuestos en este informe, se evidencia como uno de los principales retos, en materia de la implementación de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, está relacionado con el goce del derecho a la vivienda digna. Aun así, se evidencia que a pesar de los bajos resultados en este derecho (24% de los hogares lo cumplen), el problema es estructural y afecta de igual manera a las víctimas en todo el país, pues el cumplimiento en Colombia

(16%) es más bajo que el de Bogotá en más de siete puntos porcentuales. Finalmente, se reitera el reto presupuestal en materia de indemnizaciones administrativas, derecho en el cual se avanza de manera gradual en la medida en que no todas las víctimas pueden ser indemnizadas al mismo tiempo y que “el Programa de Reparación de Colombia, en perspectiva comparada, es el que más personas atiende (aproximadamente el 15% de la población del país), el que mayores hechos victimizantes reconoce, y el único en el mundo que indemniza el desplazamiento forzado” (Anexo 4. Informe Anual del Gobierno Nacional 2018, UARIV, pp. 610).

Por último, para los derechos a la justicia y a la generación de ingresos en el marco de los IGED, el proceso de medición por parte de la RNI no ha llegado a la territorialización de los datos, motivo por el cual la Alta Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación no cuenta con información para estos dos derechos en el caso de Bogotá. Por lo tanto, para los indicadores de los derechos a la justicia y a la generación de ingresos no fueron incluidos en este informe debido a la falta de información suministrada por la RNI. Enlace IGED <https://observatorio.victimasbogota.gov.co/informelIGED2021> (Anexo 5. Informe de medición de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos – Marzo 2021)

3. Sírvasen informar, ¿Cómo se construyeron los indicadores del Goce Efectivo de los Derechos de las víctimas (IGED) que actualmente son medidos por el Observatorio Distrital de Víctimas?

La metodología para la construcción del IGED se realiza un proceso donde lo primero que identificamos son las fuentes de información para la extracción análisis y procesamiento.

Las fuentes identificadas para el proceso de información:

RUV: Registro Único de Víctimas, para el informe IGED 2021 se tomó el RUV a corte de 1 de enero del 2021 que se obtiene mediante proceso de intercambio de información con la UARIV.

SIVIC: Esta es la herramienta utilizada por la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación Para capturar la información de las atenciones de ayuda humanitaria inmediata, atenciones sicosociales y otras brindadas por esta dependencia en el marco de los Centro de Encuentro.

SIMAT: Fuente de información donde están todos los niños y niñas de Bogotá que actualmente están estudiando tanto en colegios privados y en colegios Públicos.

Salud: La secretaria de salud nos comparte la población Víctima del con formato armado la base de salud de las personas víctimas del conflicto armado que están en Bogotá por el sistema contributivo y subsidiado.

Con las anteriores fuentes se realiza una normalización y mediante herramientas de análisis de datos que cruzan las diferentes fuentes para extraer y medir los indicadores del IGED.

Los indicadores que construimos para mediante este proceso son:

1. Garantías de No Repetición
2. Derecho a la salud y rehabilitación

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



- 2.1. Aseguramiento en Salud
- 2.2. Rehabilitación - Atención Psicosocial
3. Derecho a la educación
4. Derecho a la Subsistencia Mínima

Los demás derechos se extraen del Informe anual de gobierno 2020 ya que es la fuente oficial del Gobierno Nacional donde entregan los siguientes indicadores:

- Derecho a Retornos y Reubicaciones
- Derecho a la Restitución de Tierras y Protección de Predios
- Derecho a la Vivienda
- Derecho a la Indemnización Administrativa

4. *Sírvase informar, ¿El observatorio ha considerado reformular estos indicadores y medirlos de otra manera? ¿Se ha pensado en que estos indicadores sean medidos de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en sus autos 116 de 2008 y 373 de 2016?*

Como se señaló en el punto 1 respecto a la contextualización normativa y jurisprudencial, mediante los autos 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008, la Corte Constitucional adoptó un conjunto de 174 indicadores obligatorios (38 indicadores de resultado, 60 indicadores complementarios y 76 asociados), considerados como suficientes, pertinentes y adecuados para medir el avance, estancamiento o retroceso en la superación del ECI y en la garantía del goce efectivo de 20 derechos de la población desplazada. La lista de derechos para los cuales se adoptaron indicadores de goce efectivo de derechos es:

1. Vida.
2. Integridad personal
3. Libertad
4. Vivienda
5. Salud
6. Educación
7. Alimentación
8. Generación de ingresos
9. Identidad
10. Estabilización socioeconómica
11. Prevención del desplazamiento
12. Retorno
13. Subsistencia Mínima
14. Reunificación Familiar
15. Seguridad personal
16. Participación
17. Enfoque diferencial: niños, niñas y adolescentes desplazados
18. Enfoque diferencial: pertenencia étnica y cultural
19. Enfoque diferencial: género
20. Verdad, justicia, reparación y no repetición

Con el objetivo de evaluar, de manera concreta, el grado de superación del Estado de Cosas Inconstitucional atendiendo a la medición de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED) construidos a lo largo del proceso de seguimiento, la Corte profirió los Autos 008 de

2009, en los cuales consideró que aún no se alcanzaba un avance sistemático e integral en la garantía de los derechos de la población desplazada, sustentada en la información aportada por el Gobierno Nacional, los Organismos de Control y los distintos acompañantes al proceso de seguimiento, así como en las encuestas de verificación del goce efectivo de derechos de la población desplazada (2008 y 2010), elaborados y aportados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPDF).

Particularmente, el Auto 219 de 2011 ordenó ajustes en la institucionalidad y reformulación de varios componentes de la política, teniendo en cuenta los cambios previstos en la Ley 1448 de 2011.

A comienzos del 2015 fueron allegadas a la Sala Especial de seguimiento las nuevas mediciones del Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada, por parte de la Unidad para las Víctimas y de la Contraloría General de la República. Estos resultados fueron presentados, analizados y debatidos en el marco de la audiencia pública citada mediante Auto 028 de 2015.

En el marco de seguimiento a la política pública, la Corte Constitucional ha desarrollado diferentes criterios para el levantamiento del ECI en cada componente, especialmente a través del Auto 373 de 2016 de conformidad con las características de cada derecho, determinó de acuerdo con el nivel de cumplimiento en la garantía del Goce Efectivo del Derecho, la continuidad de intervención del juez constitucional, siendo esta de carácter residual. Asimismo, la Corte desarrolló una nueva valoración de la persistencia o de la superación del ECI y, además, e hizo explícitos los aspectos de la política pública y los ejes analíticos a partir de los cuales se realizaría, en adelante, el seguimiento a la sentencia T-025 del 2004. En consecuencia ordenó a la UARIV y al DNP identificar:

- (iii) Las necesidades de capacidad institucional y administrativa; y
- (iv) Los ajustes a la batería de indicadores que consideraran adecuados para realizar un análisis comparativo de la situación de la población desplazada, en relación con el resto de colombianos y víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), teniendo en cuenta los motivos que condujeron a la declaratoria del ECI en 2004.

El análisis integrado de balance de la política pública y de los resultados de la medición de los Indicadores del Goce Efectivo de Derechos -IGED- para la población en situación de desplazamiento forzado, a la luz de los criterios y umbrales fijados a partir del Auto 373 de 2016, han permitido consolidar en cabeza del Gobierno Nacional una Estrategia de Superación del ECI, resultando un elemento fundamental para impulsar la política pública dirigida a la población en situación de desplazamiento forzado.

Ahora bien, el Acuerdo 587 de 2015, adoptó un sistema de seguimiento y evaluación a la política pública a favor de las víctimas, que incluye, entre otros, un conjunto de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, de acuerdo al marco normativo legal vigente y por ello, la Administración Distrital incluye dentro del Plan de Acción Distrital de Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, tomando como referencia los que adopte la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adaptándolos en algunos casos a las realidades demográficas, socioculturales y económicas del Distrito y de acuerdo con los lineamientos dados por la Alta Consejería de Paz, Víctima y Reconciliación, con el propósito de medir los avances que ha tenido el Distrito Capital en la atención y reparación de las víctimas.

Conforme lo anterior, y tal como señala el Acuerdo 587 de 2015, la UARIV, es la fuente principal de información de la Alta Consejería para la elaboración del Informe IGED en el Distrito Capital; así como para las acciones que, en función del goce efectivo de derechos a la población víctima residente en la ciudad debe realizar la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y en este sentido los indicadores de derechos se han medido acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sus diferentes autos de seguimiento, que han establecido nuevos indicadores con el fin de mejorar la medición que se realiza.

De otro lado, el Observatorio Distrital de Víctimas, ha informado que con la construcción del Plan Operativo de Sistemas de Información “POSI” se han robustecido el intercambio de información con las entidades del SDARIV, con lo anterior la Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación ha robustecido sus fuentes de información y esto nos lleva a que los indicadores los podamos desglosar por variables diferenciales dando una mayor información y alcance al informe IGED. (Anexo 6. Aprobación Plan de mejoramiento – POSI) y (Anexo 7. Matriz plan de mejoramiento POSI (Plan operativo de sistemas de información).

5. Sírvese informar, ¿Por qué razón no hay mediciones sobre el impacto de los servicios que son prestados por las entidades distritales? ¿Planean realizarlas en un future cercano?

Esta Corporación, en distintos pronunciamientos, en particular en los autos 008 de 2009 y 219 de 2011, ha tenido en cuenta los resultados de la aplicación de los indicadores de goce efectivo de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, como un insumo importante para evaluar si se está superando el estado de cosas inconstitucional, y en esa medida, avanzado de manera acelerada en el aseguramiento del goce efectivo de los derechos de los desplazados. Lo anterior, por cuanto constituyen un instrumento de medición útil para evaluar el impacto de la política pública, lo mismo que para evidenciar avances, rezagos y retrocesos en el cumplimiento de las metas fijadas.

6. Sírvese informar, ¿Cuál es la explicación de tener indicadores enfocados en la demanda y que año tras año dan como resultado el cumplimiento total? ¿Cómo este tipo de indicadores ayudan al mejoramiento de la política pública?

Los indicadores enfocados a la demanda son:

1. Derecho a la Subsistencia Mínima
- 1.1. Rehabilitación - Atención Psicosocial

Estos dos indicadores comparten una característica, que, dada su naturaleza, requiere que se oferten por demanda. Para el caso del Derecho a la Subsistencia Mínima, este se encuentra asociado al otorgamiento de Ayuda Humanitaria Inmediata.

el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 define y establece los requisitos para el otorgamiento de ayuda humanitaria inmediata –AHÍ para personas que manifiestan ser víctimas de desplazamiento forzado u otro hecho victimizante.

Los artículos 47 y 63 de la Ley 1448 de 2011 indican que las entidades territoriales son las encargadas de atender a la población que se encuentre en la etapa de ayuda o atención

humanitaria inmediata (dependiendo cada una del hecho victimizante del que se trate), siempre que se verifique la existencia de un estado de vulnerabilidad acentuada producto del hecho declarado.

De acuerdo con la sentencia C- 278 de 2007 de la Corte Constitucional, la “vulnerabilidad” corresponde al estado en el que se encuentra una persona debido al desconocimiento grave, sistemático y masivo de sus derechos fundamentales. La ACDVPR parte de la premisa de que haber sufrido algún hecho victimizante implica per se encontrarse en estado de vulnerabilidad. No obstante, para efectos del otorgamiento de asistencia o ayuda humanitaria inmediata, la ACDVPR ha acogido lo indicado en el Decreto 1084 de 2015 (artículo 2.2.6.5.4.8.) el que define el concepto de “extrema

urgencia y vulnerabilidad”, como el estado en el cual se encuentran aquellos hogares o personas que por sus características sociodemográficas y económicas particulares y por su conformación actual están inhabilitados para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, y no puedan cubrir por sus propios medios los componentes de la subsistencia mínima en materia de alojamiento temporal y alimentación. La situación de extrema urgencia y vulnerabilidad no se considera como una condición definitiva, de manera que ésta puede ser superada a partir de cambios en la conformación del hogar, o a medida que los miembros del hogar, por sus propios medios o mediante los programas sociales de la oferta estatal, adquieran capacidades que les permitan cubrir, cuando menos, los componentes de la subsistencia mínima.

En el contexto expuesto es competencia exclusiva del Distrito lo correspondiente a garantizar la subsistencia mínima a través de la Ayuda Humanitaria Inmediata, desde la cual se busca que quienes lleguen a la ciudad por razón de algún hecho victimizante sucedido en el marco del conflicto armado, tengan alojamiento, alimentación y atención en salud desde que hacen su declaración hasta que son incluidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV – en el Registro Único de Víctimas. Vale la pena aclarar que los componentes básicos de AHI están determinados por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios,

De la misma forma, el Distrito para el otorgamiento de atención humanitaria a personas que manifiestan ser víctimas de desplazamiento forzado se ha acogido a lo indicado por la norma y en el marco de sus competencias, entrega los componentes indicados en la Ley y verifica en cada caso la existencia de los presupuestos contenidos en el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 y artículo 2.2.6.5.2.1 del Decreto 1084 de 2015, a saber:

1. Manifestación de haber sido víctima de desplazamiento forzado, la cual se materializa con la declaración juramentada rendida ante Ministerio Público de la que trata el artículo 61 de la Ley 1448 de 2011 y el respectivo diligenciamiento del Formato Único de Declaración -FUD-.
2. La solicitud de otorgamiento de atención humanitaria inmediata debe ser presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la ocurrencia del hecho victimizante, a menos que se allegue certificado de fuerza mayor, emitido por el Ministerio Público, en cuyo caso los tres (3) meses contarán a partir de la fecha en que cesen las condiciones de fuerza mayor, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 63 de la Ley 1448 de 2011.

3. Podrán ser beneficiarios de atención humanitaria inmediata las personas y unidades familiares quienes una vez surtido el proceso de evaluación, evidencian la existencia de un estado de vulnerabilidad acentuada producto del desplazamiento forzado declarado.

4. Se reconocerá la atención humanitaria inmediata a las personas que manifiesten que Bogotá es su municipio receptor.

Ahora bien, la atención humanitaria inmediata se entrega de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.6.5.2.1 del Decreto 1084 de 2015 reglamentario de la Ley 1448 de 2011, que establece que “la entidad territorial receptora de la población víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación, manejo de

abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, mientras se tramite la inscripción en el Registro Único de Víctimas”. **Negrita fuera del texto original.**

De otra parte, la ayuda humanitaria inmediata que corresponde al auxilio que se entrega por otros hechos victimizantes distintos a desplazamiento forzado, se otorga igualmente acogiendo los parámetros indicados en el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, y artículo 2.2.6.4.1 del Decreto 1084 de 2015 así:

1. Manifestación de haber sido víctima de un hecho distinto a desplazamiento forzado, la cual se materializa con la declaración juramentada rendida ante Ministerio Público de la que trata el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 y el respectivo diligenciamiento del Formato Único de Declaración -FUD-.

2. El hecho victimizante debe haber ocurrido dentro de los últimos tres meses.

3. Encontrarse en situación de vulnerabilidad acentuada a partir de las afectaciones derivadas del hecho victimizante declarado.

4. Se reconocerá la ayuda humanitaria Inmediata a las personas que manifiesten que Bogotá es su municipio receptor.

Asimismo, el mismo Decreto en su artículo 2.2.6.4.1 define que “(...) Esta ayuda debe cubrir los componentes de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio; por un (1) mes prorrogado hasta por un mes adicional”. **Negrita fuera del texto original.**

Como se observa las personas que han declarado, deben solicitar en unas condiciones temporales, la ayuda, y al ser evaluados además deben presentar un estado de vulnerabilidad acentuada. Por ello, la medición se realiza a partir del número de solicitudes que cumplen con los requisitos legales, frente al comparativo, de atenciones otorgadas.

En el caso de la Atención Psicosocial, esta igualmente está asociada a la voluntariedad de la persona de recibirla, y en efecto la medición de este indicador también está asociado a la demanda.

El 100% de las personas que solicitaron medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata, Rehabilitación o atención psicosocial en Bogotá y acreditaron los requisitos definidos en la Ley para acceder (en el caso de AHÍ), gozaron de la garantía del servicio u/o atención.

Ahora bien, respecto a la pregunta de ***¿Cómo este tipo de indicadores ayudan al mejoramiento de la política pública?***, se tiene que, en caso de que Bogotá como entidad territorial incumpla con los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, de atender en estos dos componentes a quien los solicita, sea por motivos de presupuesto u otros, estos indicadores van a ser la primera alerta de los incumplimientos en la prestación de estos servicios por parte de Bogotá a la Población Víctima del Conflicto Armado.

7. Sírvase informar, ¿Qué programas han adoptado las entidades distritales con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas en Bogotá?

En el año 2012 se expide el Acuerdo 491 de 2012 bajo el cual se crea el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra en Bogotá (SDARIV), el cual está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel distrital y nacional y demás organizaciones públicas y privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas en Bogotá.

Este sistema es el encargado de formular y ejecutar la Política Pública de Víctimas, la cual, de conformidad a lo planteado por el acuerdo, contendrá acciones para la garantía del derecho a la reparación integral, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido las víctimas como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La reparación integral comprende los derechos a la memoria, verdad y la justicia, así como también las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

El SDARIV desde el año 2012 ha formulado, implementado y ejecutado Planes de Acción Distrital (PAD) en concordancia con los tiempos de los Planes Distritales de Desarrollo. El Plan de Acción Distrital (PAD) es la hoja de ruta para la planeación e implementación de la política pública de víctimas en el Distrito. Este instrumento recoge los programas, proyectos, procesos, acciones y recursos en los componentes de atención, asistencia, reparación integral, prevención, protección y garantías de no repetición, memoria, paz y reconciliación, con el objetivo de garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima que se encuentra en la ciudad de Bogotá.

Contexto del Plan de Acción Distrital:

Con la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y sus decretos reglamentarios, se estableció la formulación de instrumentos de política pública a nivel departamental, municipal y distrital (planes, programas estrategias, entre otros), orientados a la población víctima del conflicto armado.

De esta manera, la Ley definió un esquema específico para la ejecución y territorialización de esta política en los distintos niveles de gobierno. Así, mediante el Decreto 2460 de 2015 se adoptó la Estrategia de Corresponsabilidad como un modelo de gestión pública que busca articular las etapas de planeación, ejecución y seguimiento de la política pública para las víctimas del conflicto armado, con el ejercicio de las competencias de las entidades a nivel municipal, departamental y distrital que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), bajo los principios de coordinación,

subsidiariedad, complementariedad y concurrencia. Esto con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima del conflicto armado interno y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Es por ello que, en cumplimiento del artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, en la formulación y aprobación de los Planes de Desarrollo, las entidades territoriales deben incluir como componentes fundamentales, en primer lugar, programas, estrategias o acciones orientadas a la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Además, en el Plan Plurianual de Inversiones, es necesario definir los recursos con los cuales se financiarán y ejecutarán dichos programas y se alcanzarán las metas previstas.

En segundo lugar, a partir de los programas, metas y recursos incluidos en el respectivo Plan de Desarrollo Territorial y en armonía con los demás instrumentos de planeación y presupuesto, las entidades territoriales deben diseñar el Plan de Acción Territorial (PAT), el PAT es el principal instrumento con el que cuentan las gobernaciones y alcaldías para la planeación e implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado, mediante programas, acciones y estrategias dirigidos a esta población. De esta manera se busca coordinar armónicamente el trabajo de las diferentes instituciones, comprometer recursos fiscales, y realizar el seguimiento y evaluación de los avances y dificultades de las acciones implementadas.

Por lo anterior, de acuerdo con el Decreto 1084 de 2015, el PAT debe cumplir con los siguientes parámetros:

- (i) debe contener los programas y proyectos de la entidad territorial para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado;
- (ii) (debe establecer las metas y recursos anualizados para garantizar el goce efectivo de derechos (los cuales deben ser indicativos para los cuatro (4) años siguientes a la adopción del PAT);
- (iii) debe establecer mecanismos de seguimiento y de evaluación con metas e indicadores; y (iv) debe contener como mínimo, la caracterización de las víctimas de la respectiva jurisdicción que considerará los distintos hechos victimizantes.

A partir de estas definiciones, la ciudad de Bogotá adopta el Plan de Acción Distrital (PAD), como herramienta de política pública que determina la oferta de las entidades del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado residentes en Bogotá (SDARIV) y establece los lineamientos para su implementación, seguimiento y evaluación.

En concordancia, el Comité Distrital de Justicia Transicional (CDJT) como máxima instancia de coordinación Distrital aprobó un PAD con un total de 146 metas, enmarcadas en 71 proyectos de inversión, 11 sectores, 21 entidades, lo que da cuenta del carácter interinstitucional e intersectorial que acompañan los procesos asociados para promover el goce efectivo de derechos de la población víctima.

A la fecha 21 entidades de orden Distrital establecen oferta, metas y presupuesto en el marco del Plan de Acción Distrital. Estas se relacionan a continuación:

- Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
- Caja de Vivienda Popular

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



- Instituto Distrital de Recreación y Deporte
- Instituto para la Economía Social
- Orquesta Filarmónica de Bogotá
- Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
- Secretaría Distrital del Hábitat
- Secretaría Distrital de Integración Social
- Secretaría Distrital de la Mujer
- Secretaría Distrital de Planeación
- Secretaría Distrital de Salud
- Secretaría de Educación Distrital
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
- Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC)
- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
- Secretaría Distrital de Gobierno
- Instituto Distrital de las Artes
- Fundación Gilberto Álzate Avendaño
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

De conformidad a lo expuesto, se adjuntan los siguientes anexos para dar respuesta a la proposición:

1. Plan de Acción Distrital 2020 – 2024 (Anexo 9)
2. Plan de Acción Distrital 2021 (Anexo 10)
3. Plan de Acción Distrital 2022 (Anexo 11)

Del mismo modo, desde la Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se inició la implementación de la línea 195 como ruta de ingreso de activación de oferta pública y privada, para la población víctima residente en la ciudad de Bogotá, D.C. Por medio de este canal se caracteriza socioeconómicamente a la población para identificar las habilidades y destrezas ocupacionales de la persona, a partir de la revisión de sus antecedentes de formación y experiencia laboral. Para esta labor se ha establecido como herramienta de focalización un formulario que se diligencia en los Centros de Encuentro, Punto de Atención a Víctimas o por la Unidad Móvil, donde los profesionales psicosociales, jurídicos, referentes étnicos, orientadores, gestores o coordinaciones pueden diligenciar en compañía de la persona interesada. Así mismo, a través de esta estrategia se espera llamar e identificar efectivamente a las personas víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá y caracterizarlas.

La información obtenida ha permitido identificar las habilidades e intereses de la población víctima, con el ánimo de remitir sus datos a los aliados para el acceso efectivo a la oferta de la ruta de estabilización socioeconómica y de esa manera, contribuir a la reparación integral. Los aliados privados, son entidades que cuentan con ofertas para población vulnerable en las tres (3) líneas: formación, empleabilidad y emprendimiento. Además, como medida de reactivación económica, durante el año 2021 se avanzó en un proceso de articulación interinstitucional con el Sector Desarrollo Económico y la ACPVR, con el objetivo de promover el acceso prioritario de este grupo poblacional a la oferta institucional de este sector, a través del intercambio de información.

Durante el segundo semestre del 2021 se realizaron 108.900 llamadas telefónicas, con un contacto efectivo de 23.467 personas (21%), de las cuales 18.249 (78%) viven en Bogotá. Se logró realizar un total de 4.371 remisiones a los aliados y a su vez a las entidades del distrito con oferta para población víctima.

8. *Sírvase informar, ¿Qué acciones ha adelantado la administración distrital para mejorar la información y la producción de datos con respecto a la calidad de vida de las víctimas en la ciudad?*

- Construir el POSI como herramienta de información para crear lineamientos de intercambio de información entre las entidades del SDARIV y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación
- Memorando de entendimiento entre la secretaria Distrital De Integración Social y la oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el intercambio de información entre ambas entidades.
- Mantener el acuerdo de información de IDECA para la georeferenciación de la población Víctima radicada en Bogotá.
- Participar en proyectos de investigación como SandBox de MinTic Proyecto desarrollado por la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación mediante La plataforma Data Sandbox donde es un espacio colaborativo para las entidades públicas del país, en donde se podrán realizar diferentes proyectos piloto de Analítica y Big Data. La plataforma será empleada para explorar conjuntos de datos de manera colaborativa e interactiva entre varios Usuarios del Data Sandbox de una misma Entidad, con el fin de probar, experimentar, ensayar y determinar soluciones aplicables en el contexto real a problemáticas públicas y/o ciudadanas. Esta plataforma cuenta con altas capacidades para el almacenamiento y procesamiento de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, a través del uso de tecnologías de Big Data. Link de acceso: <https://github.com/ObservatorioVictimas/ObservatorioVictimas-Representacion-Cartografica-del-Alcance-de-la-Politica-de-Victimas-del-Conflict>

9. *Sírvase informar, ¿Cuál es el grado de cooperación entre las entidades distritales con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)? ¿Qué ha hecho la administración para mejorar el flujo de información entre el Distrito y la Nación?*

Desde la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV con la Ley 1448 de 2011, se le confirió a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la función de aplicar instrumentos de certificación a las entidades que conforman el SNARIV respecto a su contribución en el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. En el marco del Decreto 2460 de 2015, por el cual se adopta la Estrategia Corresponsabilidad de la Política Pública de Víctimas, las entidades territoriales tienen la obligación de realizar reportes a diversas herramientas del orden nacional, con el fin de identificar el nivel de contribución de los departamentos, distritos y municipios en el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de víctimas, a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral. A continuación, se dan a conocer las

herramientas de reporte que realizar la Administración Distrital, en cabeza de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación:

- **Reporte Unificado de Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado (RUSICST)**

Es un mecanismo de información, seguimiento y evaluación al desempeño de la Administración Distrital en relación con la implementación de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado, reglamentado mediante el Artículo 2. 2. 8. 3. 8. Decreto 1084 de 2015. Este mecanismo se encuentra bajo coordinación de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior quienes con una periodicidad semestral realiza un proceso de solicitud de información y valoración correspondiente a las acciones implementadas desde el orden distrital.

Este mecanismo permite fortalecer la capacidad institucional del Distrito mediante la divulgación de la política pública, la identificación de las falencias institucionales y la propuesta e implementación de un plan de mejoramiento que permita avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la población víctima. Adicionalmente, este insumo contribuye al proceso de certificación territorial que se encuentra en cabeza de la Unidad para las Víctimas. El reporte RUSICST permite garantizar una retroalimentación constante entre el orden distrital y nacional, con el ánimo de garantizar la aplicación de los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación y la medición de la coordinación entre los sectores de la administración pública.

- **Certificación Territorial**

Es uno de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la Política Pública de Víctimas que se basa en la medición del grado de contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., esta evaluación se realiza a través de la revisión de las acciones adelantadas por parte del Distrito en términos de gestión y resultados durante cada vigencia en los componentes de asistencia, atención, protección, prevención y garantías de no repetición, reparación integral, memoria paz y reconciliación y ejes transversales (participación, sistemas de información, fortalecimiento institucional).

Este mecanismo conlleva un proceso de articulación, gestión, consolidación y reporte de información en razón a las acciones implementadas por cada una de las entidades del orden distrital que cuentan con acciones o metas comprometidas en la implementación de la política pública de víctimas, de esta forma, la Unidad para las Víctimas, determina un porcentaje de calificación y resultado que da cuenta el nivel de contribución en el diseño, implementación y seguimiento a la Política Pública.

- **Sistema de Información de Gestión de Oferta (SIGO)**

Es el sistema de información que consolida y permite consultar la caracterización, gestión y oferta de la Administración Distrital en cada una de las medidas de política en materia de salud, educación, vivienda, alimentación, generación de ingresos, reunificación familiar e identificación; así mismo, permite identificar la caracterización de los programas, proyectos y metas que dan cuenta de la oferta de las entidades distritales que cuentan con metas comprometidas en la implementación del Plan de Acción Distrital (PAD).

La Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación realiza un proceso de reporte y cargue de información de acuerdo a los criterios que establece la Unidad para las Víctimas con el propósito de contribuir a la información propia del goce efectivo de derechos y así mismo garantizar un seguimiento al acceso efectivo de la población. De esta forma se contribuye a mejorar los canales de comunicación en materia de gestión de oferta entre el nivel distrital y nacional.

- **Desde el Componente psicosocial**

Con la Unidad para las Víctimas, se llevan a cabo procesos de articulación para procesos de fortalecimiento técnico. Durante el año 2021, la Dirección de Reparación Integral, tuvo acceso a 26 cupos para el curso Transversalización del Enfoque Psicosocial y Acción sin Daño. A través de este curso, logramos la cualificación de parte del equipo psicosocial en acciones, mediante el cual se brindan lineamientos a los funcionarios del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) para ser incorporados en los diferentes programas, estrategias y componentes dirigidos a la reparación integral de las víctimas. Estos lineamientos promueven la confianza entre el estado y las víctimas, el reconocimiento del daño y de las capacidades y estrategias de afrontamiento de las víctimas, la mitigación de imaginarios y acciones con daño, así como el trato digno, humano y enmarcado en el plano de la garantía de derechos y de no repetición.

No obstante, si bien el Distrito cuenta con la estrategia de rehabilitación a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado a través de la Secretaría de Salud, no ha sido posible generar la articulación de focalización a través de las estrategias de la Unidad. Este proceso de articulación es necesario para llegar a un mayor número de personas y en los territorios focalizados para la estabilización de la población en Bogotá.

- **Componente de Retornos y Reubicaciones**

En el marco de la implementación del año 2021, con la Unidad para las Víctimas se logró la articulación para la verificación de la superación de la situación de vulnerabilidad de las personas que fueron focalizadas en la implementación del Plan. A través de la identificación de 806 hogares, se realizaron los acuerdos con las entidades del Distrito para la priorización del acceso a la oferta a servicios sociales. Adicionalmente, se logró un grado importante de cooperación en los espacios interinstitucionales de seguimiento a la implementación del Plan, con el fin de tener mayor incidencia en las entidades del orden nacional y distrital en la vinculación participativa de estas con la población.

Sin embargo, es necesario contar jornadas para orientación y toma de actas de voluntariedad para formalizar el acceso al Plan de las personas que decidieron en el marco de los procesos de socialización vincularse. Adicionalmente, es necesario contar con el plan de acompañamiento o programas alternativos para las personas que en Bogotá voluntariamente deciden formalizar el proceso de reubicación en Bogotá, así como la incidencia a través de la Unidad para priorizar oferta de orden nacional.

Con relación a la articulación administrativa la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación como oficina de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, para atender los requerimientos de la población Embera, desde el mes de marzo de 2021 se avanzó con el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral para las

Víctimas, la Secretaría de Gobierno, en la definición de rutas y estrategias para adelantar un procesos de retorno en dónde se logró atender de manera diferencial las necesidades socioeconómicas, de alimentación y habitabilidad de la población Embera.

A través del equipo de la Unidad Móvil y en compañía del equipo de enfoque étnico de la Dirección de Reparación Integral de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se brinda acompañamiento y atención integral a la población Embera que se encuentra presente en la ciudad de Bogotá, mediante de la implementación de acciones de manera permanente en la Unidad de Protección Integral – UPI La Florida y en este ejercicio ha liderado tres procesos de retorno de esta población, así:

1. 01 de diciembre de 2021 – Total personas retornadas 415.
2. 20 de diciembre de 2021 – Total personas retornadas 770.
3. 01 de marzo de 2022 – Total personas retornadas 358

Estos retornos se han dirigido a la vereda Dokabu del municipio Pueblo Rico en el departamento de Risaralda por ser el límite entre con el Departamento del Chocó donde las comunidades Embera Chami y Katio tienen su territorio ancestral.

Sin embargo, es importante señalar que los procesos de retorno que se han adelantado hasta el momento se han realizado bajo el protocolo de acompañamiento individual descrito en la Resolución No. 03320 del 22 de noviembre de 2019.

- **Componente Territorial**

La Dirección de Reparación Integral de la ACPVR tiene a su cargo espacios físicos dispuestos para la asistencia y atención de población víctima que reside o llega a la ciudad de Bogotá. Los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local responden a una estrategia de articulación interinstitucional (nacional y territorial) que tiene como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las víctimas que, en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, requieran acceder a la oferta estatal en aras de facilitar los requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral (Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015, Nivel Nacional).

En la actualidad, en Bogotá, la UARIV tiene como espacio de funcionamiento principal los Centros de Encuentro, desde donde despliega su oferta institucional a las personas víctimas que se encuentran en el Distrito y, por ende, es este el principal escenario de articulación.

En este sentido, el proceso de articulación y cooperación con la UARIV inicia desde el momento del otorgamiento de medidas de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata, siendo este uno de los principales servicios que presta la ACPVR y que se configura como piedra angular para la estabilización inicial de las familias, al responder a la inmediatez.

En este momento, el ejercicio de articulación es permanente porque la etapa inicial del proceso de asistencia y atención responde a las medidas que se otorgan durante el tiempo en el que se realiza el proceso de valoración por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Es así como, permanentemente, se debe consultar el sistema de información Vivanto y validar con la entidad el estado en que se encuentra cada una de las declaraciones de los sistemas familiares, que se atienden en los Centros de Encuentro (CE). Adicionalmente, se articula con dicha entidad los procesos de

notificación, una vez se emite respuesta de Inclusión o No inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), ya que de eso depende la etapa de la ruta en la que se ubica el sistema familiar, ya sea porque inicia su proceso con la UARIV para solicitar las Ayudas Humanitarias de Emergencia o se deban presentar recursos ante la decisión emitida por dicha entidad en los tiempos establecidos por Ley, recibiendo apoyo de la ACPVR.

Es de anotar, que las dos entidades que tienen mayor requerimiento en los CE son la ACPVR y la UARIV y con el fin de dar respuesta a las necesidades de la población, las relaciones entre las dos entidades son armónicas y se propende por tener posiciones unificadas frente a los diversos sucesos que se presentan en los mismos. Por este motivo, la presencia de dicha entidad se configura como una fortaleza para el trabajo con población víctima que desarrolla el Distrito, ya que la demanda más alta que tienen las víctimas, se relacionan directamente con los procesos y servicios que presta la UARIV, las ayudas humanitarias de emergencia y transición, la indemnización, así como los ejercicios de retorno y reubicación que adelantan.

Sin embargo, y con el ánimo de mejorar en la prestación de servicios, se evidencia una necesidad de generar procesos de fortalecimiento técnico permanente y periódico para los colaboradores de las diversas entidades. Dichas acciones involucran el intercambio de conocimiento, además de la socialización de rutas y servicios que prestan cada una de las entidades con el objetivo de no generar reprocesos en la atención a la población y dar respuestas integrales y efectivas a las solicitudes de los sistemas familiares.

Adicionalmente, la ACPVR como responsable de la coordinación y administración de los Centros de Encuentro, evidencia la necesidad de que la UARIV preste sus servicios en el horario de atención de estos espacios y disponga de un equipo de orientadores específicos, que coadyuven a descongestionar los Centros, puedan agendar y organizar el ingreso de la población, además de tener la capacidad de resolver dudas al ingreso de la población. Dicha disposición permite no generar falsas expectativas y, en ciertas situaciones, establecer rutas claras que no generen limitaciones, ni planteen barreras de acceso a la población.

Finamente, se debe indicar que la ACPVR y la UARIV, en la actualidad cuentan con un acuerdo para el manejo de la información que permite la consulta por parte de los funcionarios de la ACPVR en el aplicativo VIVANTO el cual como se mencionó permite la consulta del estado de valoración de las declaraciones presentadas por la población ante el ministerio público.

Respecto a la pregunta; ***¿Qué ha hecho la administración para mejorar el flujo de información entre el Distrito y la Nación?***, se debe decir lo siguiente:

- Se realizado la aprobación de POSI para el flujo de información entre Alta Consejería de Paz Víctimas y Reconciliación con el SDARIV.
- Inventariar las fuentes recibidas por la Nación en repositorios del Observatorio Distrital de Víctimas
- Realizar intercambio de información en ambas vías tanto por parte de la UARIV a la Alta Consejería de Paz. Víctimas y reconciliación y viceversa.

- Solicitar espacio en Azure para el almacenamiento y procesamiento seguro de la información

10. Sírvase informar, ¿Qué información adicional requeriría la Administración Distrital para poder medir todos los IGED de las víctimas en la ciudad? ¿Por qué no se cuenta con esta información?

Acorde al Artículo 2.2.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015 donde se establecen las funciones de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas se determina que el ente encargado de interactuar entre la información a Nivel Nacional y las entidades territoriales es la RNI, debido a ello los indicadores que se extraigan de fuentes a nivel nacional deben ser proporcionados por este mismo.

La Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas es el instrumento que establece mecanismos, lineamientos, políticas, procesos y procedimientos que permiten la interoperabilidad, trazabilidad y el flujo eficiente de la información entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el orden nacional y territorial, los organismos de cooperación internacional, la sociedad civil, las organizaciones de víctimas, y otras entidades estatales.

1. Establecer lineamientos para la migración, el intercambio de información e interoperabilidad de los sistemas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
2. Brindar insumos para caracterizar y focalizar a las víctimas teniendo en cuenta sus características particulares.
3. Brindar información a las entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en el orden nacional y territorial del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para formular, implementar, y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral, de acuerdo con los principios establecidos en la presente Parte.
4. Apoyar el desarrollo técnico de los Sistemas de Información de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para facilitar su participación en la Red definida en este Título, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Operativo de Sistemas de Información.
5. Definir los mecanismos de coordinación entre las instituciones que conforman la Red.

11. Sírvase informar, ¿Qué factores han llevado a no resolver la problemática de los pueblos indígenas víctimas del conflicto que se ubican en el Parque Nacional y el Parque la Florida?

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha ejecutado diferentes acciones con el fin de garantizar derechos fundamentales de las comunidades que se encuentran asentadas en el Parque Nacional, especialmente en el sentido que ofrecer varias alternativas de atención y asistencia a través de espacios adecuados como albergues en la ciudad de Bogotá; asimismo se ha realizado la articulación interinstitucional con el Gobierno Nacional para

posibilitar el retorno a los territorios de origen en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad. En el marco de lo anterior, distintas entidades del Distrito han intentado en varias ocasiones la identificación de la población asentada, sin embargo, ha existido resistencia por parte de la población a permitir esta labor de identificación que es necesaria para orientar la oferta institucional.

En ejercicio de las funciones asignadas por el Decreto Distrital 140 de 2021, la Alta Consejería de Paz, Víctimas y de Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha ejecutado diferentes acciones con el fin de garantizar este objetivo distrital en favor de las comunidades que se encuentran asentadas en el Parque Nacional, especialmente en el sentido que ofrecer varias alternativas de atención y asistencia a través de espacios adecuados como albergues en la ciudad de Bogotá; asimismo se ha realizado la articulación interinstitucional con el Gobierno Nacional para posibilitar el retorno a los territorios de origen en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad. En este orden de ideas, se procede a exponer las acciones adelantadas por la Entidad.

- El **29 de septiembre de 2021**, en el Parque Nacional se inició una vía de hecho por personas que se identifican como población indígena Embera y con esto, se emprendió la articulación institucional distrital como atender la situación sobreviviente.
- Así, el **30 de septiembre de 2021**, la ACPVR empezó a prestar acompañamiento con el traslado de 320 personas aproximadamente de la población Embera a la Unidad de Protección Integral –UPI- La Florida.
- Entre el **5 y 9 de octubre de 2021** egresaron voluntariamente del albergue de ACPVR aproximadamente 232 personas, que se encontraban en el marco de la ruta de la Ayuda Humanitaria Inmediata -AHÍ-, quienes decidieron trasladarse a la UPI La Florida.

Desde ese momento, como coordinadora del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas -SDARIV-, ha apoyado los procesos en relación con el retorno bajo el liderazgo de la Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas -UARIV- incluyendo el censo y caracterización de la población.

Durante este contexto, el Alcalde Local de Santa Fe, presentó una querrella por ocupación ilegal del Parque Nacional ante el Inspector de Policía, con el fin de adelantar la recuperación del espacio público.

- Es así como en el marco de este procedimiento policivo, bajo expediente número 20212240346243, el Inspector de Policía 23 de Atención Prioritaria ordenó mediante fallo del **21 de octubre de 2021** que, *“conforme al principio de colaboración armónica, se coordine con las distintas entidades del nivel Distrital y Nacional para que en el término de 48 horas se realice la respectiva caracterización de los ocupantes del predio denominado Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, garantizando los derechos de los que allí intervienen”*.

Como es visto, los intentos de censo y caracterización se habían comenzado con anterioridad a la orden, sin embargo, para el cumplimiento de estos compromisos se solicitó que desde el Ministerio Público se apoyará en adelantar un dialogo fluido con las comunidades que se encuentran en el Parque Nacional, y lograr el consenso de las acciones

que se debían adelantar para la caracterización. Este oficio fue remitido el **22 de octubre de 2021**, al Defensor Delegado para Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, al Procurador Delegado para Asuntos Étnicos y a la Personera Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

- De igual manera, el **mismo día**, en el marco de los compromisos de la reunión interinstitucional se realizó capacitación a los colaboradores de las diferentes entidades, que aplicarían el instrumento de caracterización acordado.

Pese a lo anterior, un grupo de personas decidió permanecer en vía de hecho en el Parque Nacional protagonizada principalmente por la población con pertenencia étnica adscrita al pueblo indígena Embera Katío y otras, auspiciada por nuevos liderazgos y el proceso organizativo denominado "*Autoridades Indígena en Bakatá*", quienes a la fecha no han logrado legitimar su ejercicio como autoridad.

- El **23 de noviembre de 2021** la Administración Distrital elevó solicitud de lineamientos e intervención al Ministerio del Interior, rector de la política Pública para los Pueblos Indígenas y quien fija las directrices de cómo deben proceder los entes territoriales, frente a los nuevos procesos organizativos denominado "*Autoridades Indígena Bakatá*" quienes a la fecha NO han logrado legitimar su ejercicio como autoridad.

La falta de legitimidad en el ejercicio del gobierno propio de estas denominadas autoridades, y otras circunstancias han obstaculizado las alternativas de solución a la emergencia humanitaria allí presentada y el ingreso de las diferentes entidades del orden distrital y del orden nacional, entre estas del ICBF, al Parque Nacional.

- El **miércoles 15 de diciembre de 2021** se llevó a cabo reunión con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Secretaría Distrital de Integración Social, SDSCJ - Dinamizador, Instituto Distrital de Recreación y Deportes - IDRD, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER, y Secretaría General representada en la Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y de Reconciliación –ACPVR, con el objetivo de analizar la posibilidad de que la población indígena que se encuentra en el Parque Nacional fuera trasladada a las instalaciones del Coliseo o Polideportivo de Arborizadora Alta. Ese mismo día en las horas de la tarde, la comisión delegada (representantes indígenas) junto con representantes de la Administración Distrital se trasladan al espacio mencionado para verificar las condiciones del lugar.

Una vez se realiza la labor de verificación por las partes al Polideportivo, sobre las 5:00 pm aproximadamente se realiza una reunión en el lugar, precedida por el Alcalde Local de Ciudad Bolívar, representantes de las Entidades y voceros de la población donde se tratan temas de vital importancia como la adecuación al lugar y así como las condiciones mínimas de subsistencia en salud, alimentación, agua potable, elementos de aseo personal, manejo de residuos sólidos, desagüe etc.

Los autodenominados voceros manifiestan que al día siguiente van a realizar una reunión con las comunidades para concertar ideas y así tomar una decisión concertada si aceptan el traslado del Parque Nacional hacia el Polideportivo en mención.

Ante la propuesta de adecuación del Polideportivo de Arborizadora Alta para el traslado de las comunidades, los autodenominados voceros manifestaron su negativa sin ningún tipo de

justificación, de tal forma que para la Administración Distrital no era viable invertir recursos públicos para la adecuación del Polideportivo cuando los representantes de los indígenas manifestaron su completa renuencia a dicho traslado.

- El **17 de diciembre de 2021**, se realizó Puesto de Mando Unificado-PMU en las intermediaciones del Parque Nacional para entablar diálogo sobre la caracterización y/o relación de personas para contabilizar el término de los 10 días, para realizar la actividad.

Las entidades que acompañaron a la actividad fueron la Subsecretaría de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, Personería Delegada, Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS, Secretaria de Seguridad, Diálogo Social y la ACPVR que dialogaron con los líderes que refirieron que hay 800 familias que necesitan alimento para cada núcleo pero que no van a firmar nada ni dar datos, imposibilitando así el ejercicio de caracterización.



La ACPVR entabló diálogo con los líderes con el fin de dejar 250 mercados de la SDIS y luego hacer la caracterización, dónde ellos no aceptaron. La conclusión de ese día fue negativa, sin embargo, solicitaron espacio autónomo para decidir, quedando así para el **18 de diciembre** en la mañana acordar operativo con los líderes.



- Al día siguiente, es decir **18 de diciembre de 2021**, una vez más las Entidades distritales hicieron presencia en el Parque Nacional, pero los autodenominados voceros no recibieron los mercados ofrecidos y tampoco permitieron realizar la caracterización nuevamente.
- El **20 de diciembre de 2021** en el Parque Nacional se reunieron la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Salud, la Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV junto con representantes de la comunidad indígena asentada, con el fin de establecer las estrategias y lineamientos de diálogo para llevar a cabo el proceso de caracterización de manera coordinada, de tal forma que se garanticen los derechos fundamentales.

La Administración Distrital diseñó un instrumento de caracterización que tiene enfoque diferencial, permite la individualización de las familias y sus integrantes, y la información necesaria para orientar la oferta social. La herramienta de caracterización fue puesta a disposición de las comunidades.

- Durante las semanas del **24 y el 31 de diciembre de 2021**, se celebraron Puestos de Mando Unificado debido a que se presentaron riñas y agresiones internas entre las personas asentadas en el parque. Por esta razón, varias familias de manera autónoma se han trasladado a sus territorios por miedo a su seguridad.

Hasta la fecha solamente se ha logrado un diálogo exitoso con comunidad Embera Dobida, en el sentido que accedieron a trasladarse de manera voluntaria al alojamiento de la UPI La Florida dispuesto por el Distrito temporalmente para la atención de la población Embera en Bogotá, para lo cual se llegaron a compromisos por parte tanto de dicha comunidad como de las Entidades públicas en el marco de su competencia, consignadas en el acta de 13 de enero de 2022.

En este orden de ideas, el Distrito se comprometió únicamente a realizar la mencionada identificación de la comunidad Embera Dodiba, la cual fue materializada en su totalidad, con la identificación de los miembros de la comunidad con los siguientes datos consolidados:

Etiquetas de fila	Cuenta de PUEBLO	Suma de FAMILIAS UNICAS
DOBIDA	147	78
Total general	147	78

Sexo	Cantidad
Hombre	75
Mujer	72
Total general	147

Ciclo Vital	Cantidad
Entre 0 y 5 años	21
Entre 12 y 17 años	23
Entre 18 y 28 años	33
Entre 29 y 59 años	29
Entre 6 y 11 años	23
Sin información	18
Total general	147

(Tomado: resultado de la articulación distrital)

El 17 de enero, como resultado del trabajo conjunto, se trasladaron 42 sistemas familiares del Parque Nacional a la Unidad de Protección Integral UPI La Florida.

Como se observa frente a la caracterización y prestación de servicios para la comunidad Embera Dodiba se logró exitosamente a diferencia de la situación que se presenta con las poblaciones (Embera Katío y Chamí) que aún se encuentran en el Parque Nacional.

Las Entidades distritales y nacionales adelantaron todas las actuaciones y diálogos (incluyendo traductores) necesarios para que el día 3 de febrero de 2022 se llevará a cabo la caracterización. para conocimiento se anexa documento denominado “Punto 5. Propuesta plan de trabajo jornada de identificación de población Emberá de fecha 2 de febrero de 2021”, en donde se programaron las fases para desarrollar el ejercicio, acciones y entidades responsables de cada una. Se anexa documento para consulta. Catorce Entidades distritales y nacionales realizaron las actuaciones tendientes en el marco de sus competencias, de tal forma que se planeó realizar la actividad de caracterización el día 3 de febrero de 2022, contando con un total de 217 colaboradores.

Localidad	Número de personas
Alcaldía Local de Santa fe	12 personas
Alta Consejería para las víctimas	10 personas
Dialogo social de Secretaria de Gobierno	16 personas
Asuntos étnicos Secretaria de Gobierno	10 personas
Gestores de convivencia	50 personas

ICBF	11 personas
INDIGER	1 personas
IDIPRON	30 personas
MEBOG	15 personas
Secretaría de Integración Social	20 personas
Secretaría de Movilidad	5 personas
Secretaría de Salud	16 personas
Transmilenio	6 personas
Unidad de Víctimas	10 personas
DDHH- Secretaría de Gobierno	5 personas
TOTAL	217 personas

Asimismo, fueron convocadas las entidades del Ministerio Público, a fin de que brindaran acompañamiento en el proceso. Para ello, se remitieron oficios a cada una de las entidades, incluida la Personería de Bogotá. Asimismo, es pertinente tener en cuenta que también se informó a los voceros de la población ubicada en el parque sobre la realización de la actividad.

Desde las 7:00 AM se inició la organización del equipo de trabajo por roles y ubicaciones según el plan de intervención presentado ante el Puesto de Mando Unificado PMU. Para ello se instalaron las cuatro (4) carpas en terreno, que serían los espacios de identificación en los cuales estarían presentes las instituciones lideradas por los gestores de convivencia, con la finalidad de acercar a la comunidad al proceso de caracterización.

Se articuló con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo la conversación con los ocupantes del Parque Nacional. Sin embargo, ante la presencia los miembros de las comunidades indígenas la población agredió física y verbalmente a los servidores públicos y no permitieron realizar la caracterización que se había programado. De ello obra constancia en el acta de fecha 3 de febrero de 2022 suscrita por las Entidades que participaron en la mencionada actividad.

Asimismo, a continuación, se pueden observar varios videos (links en twitter) que fueron grabados por los funcionarios en donde se observan las múltiples agresiones generadas por los miembros de las comunidades indígenas:

- Tweet Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación: Ayer, 3 de febrero, gestores de convivencia invitaron a la comunidad Embera que se encuentra asentada en el Parque Nacional a realizar el proceso identificación. En el procedimiento no hubo presencia de la Policía Nacional al interior del parque y tampoco uso de la fuerza. Link de acceso: <https://twitter.com/consejeriade paz/status/1489577911430565888?s=24>
- Tweet Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación: Este jueves, varios gestores de diálogo y servidores del Distrito fueron agredidos por miembros de las comunidades indígenas que se encuentran en el Parque Nacional al iniciar el proceso de identificación en cumplimiento de una orden judicial. Link de acceso: <https://twitter.com/consejeriade paz/status/1489379540518457347?s=21>
- Tweet Los Embera sacan a PALOS funcionarios de la Alcaldía de Bogotá que estaban ahí para su caracterización. Link de acceso:

https://twitter.com/ANIABELLO_R/status/1489332851086663682?t=xR45lGEmXl3i bLGPACe6A&s=08

- Noticia: Agreden a funcionarios durante caracterización de Emberas en Bogotá EL NUEVO SIGLO – El Distrito no pudo realizar este jueves la caracterización de la comunidad embera en el Parque Nacional, debido a que algunos de sus funcionarios fueron agredidos y debieron salir del asentamiento. Según Vladimir Rodríguez, alto consejero de Víctima, Paz y Reconciliación de la Alcaldía, un grupo de integrantes de la comunidad, que serían sus líderes, habrían frenado el proceso y provocaron que otros intentaran atacar con palos y machetes, aparentemente. Link de acceso: <https://bit.ly/3sixa16>

En conclusión, la Administración Distrital como las Entidades Nacionales se encuentra dispuestas a realizar el proceso de caracterización junto a las demás Entidades del orden nacional, y con ello salvaguardar los derechos fundamentales de todas las familias asentadas en el Parque Nacional, dentro de los cuales se encuentran niños, niñas y adolescentes, frente a los cuales prevalece el interés superior del menor, situación que desde el Instituto Colombiano de Bienestar familiar –ICBF-, a través de la acción de tutela radicado 2021-000821 interpuesta el 30 de noviembre de 2021, para que se permitiera a esta entidad del orden nacional, si ingreso al parque nacional con el fin de prestar el servicio público a su cargo.

De otro lado a continuación se resumen las opciones que han sido ofrecidas por la administración Distrital, de conformidad con la información que ha sido conocida por la ACPVR, en el marco de los espacios convocados por la SDG, como alternativas de traslado temporal para atención de la población en el Parque Nacional:

1) Primera opción: UPI La Florida

La administración habilitó un espacio adicional dentro del mismo inmueble de la UPI Florida, con adecuaciones y mejoras que le permitan a las familias indígenas, en especial, a los más vulnerables, tener unas condiciones dignas, con mayor atención y garantías.

Esta propuesta fue puesta en conocimiento de los voceros de las Autoridades Indígenas en Bakatá en sesión del 29 de octubre de 2021, **pero la respuesta fue nuevamente negativa** por parte de la comunidad, pese a ser una opción digna, apropiada y de inmediata disponibilidad.

Debe decirse a propósito que, gracias a la labor armónica de las entidades nacionales y distritales, se ha logrado a la fecha **el retorno y regreso al territorio de 1543 personas pertenecientes a la comunidad indígena Embera**, por lo que existe mayor espacio en las instalaciones.

2) Segunda Opción: Inmueble de Renovación Urbana ubicado en la Localidad de Santa Fe

Se trata de una bodega que cuenta con vigilancia privada, que requiere de adecuaciones pues en el estado en que se encuentra no es habitable. Por esta razón, y en cumplimiento de los compromisos asumidos en sesión del 2 de noviembre de 2021 de la Mesa de Diálogo se logró la visita y el informe técnico por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social

y el IDIGER, con el fin de determinar el estado real del inmueble y las adecuaciones que se requerirían en el evento que la comunidad aceptara dicha opción.

Como claramente les fue informado a quienes asistían a la mesa de diálogo, en la que fungía como garante y facilitadora la Defensoría del Pueblo, el Distrito estaba en condiciones de realizar las adecuaciones de la bodega en caso de que decidan aceptarla para alojamiento transitorio o lugar de reubicación temporal.

Sin embargo, pese a haber expuesto a la comunidad dichos informes y la propuesta de adecuación y mejoras en caso de aceptar el traslado a ese lugar, **la comunidad expresó nuevamente su negativa**, bajo el argumento de un tema espiritual que resulta de haber sido en el pasado un matadero de la ciudad.

3) Tercera Opción: Polideportivo Arborizadora Alta Ciudad Bolívar:

El 15 de diciembre de 2021 se realizó la visita al predio de Arborizadora Alta, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, con la presencia de varios líderes de la comunidad indígena, el IDRD, el IDIGER, la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Gobierno. Se logró determinar que el predio está en muy buenas condiciones y que cuenta con baños, zonas de recreación, zonas verdes, área de enfermería entre otros.

Ante la posible dificultad de convivencia que podría presentarse con la comunidad del sector, el administrador del polideportivo se comprometió a realizar una reunión con los líderes del lugar.

4) Cuarta opción: Parque San José de Maryland de la localidad de Bosa

El pasado 16 de diciembre de 2021, se realizó visita al predio del parque San José de Maryland de la localidad de Bosa, ubicado en el barrio Bosa Laureles, en la que se contó con la presencia de 16 líderes de la comunidad asentada en el Parque Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno.

Para esta opción, se aclaró que, puede acondicionarse el servicio de agua potable para la preparación de alimentos y de higiene personal, por lo que de aprobarse el traslado de la comunidad a ese predio, se realizarían las adecuaciones necesarias.

5) Quinta opción: Coliseo Las Cruces

Visita realizada el 18 de diciembre de 2021 al Coliseo de Las Cruces, predio ubicado en la localidad de Santa Fe, barrio Las Cruces, con la presencia de 15 líderes de la comunidad indígena del Parque Nacional, la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.

En esta ocasión, igualmente se les informó que, de aceptarse la propuesta, se harían las adecuaciones necesarias para acondicionar el Coliseo y el suministro constante de agua potable.

12. *Sírvase informar, ¿Cuál es el estado de avance y Desarrollo de los PDET en Bogotá?*

Como es bien sabido, el *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*, hizo evidente que una paz estable y duradera incluye una mirada al territorio desde su integralidad y la convivencia entre los diferentes actores y procesos. Para esto, dentro de las principales apuestas para la consecución del logro 21 del PDD está la implementación de un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Bogotá - Región (PDET B-R), siendo este uno de los principales instrumentos para contribuir en la deuda histórica con la población más vulnerable, apartada del distrito, con altos índices de pobreza multidimensional y presencia de víctimas.

Lo anterior con el fin de reconstruir el tejido social a través de la resignificación del territorio, fortaleciendo sus instancias de gobierno local y el relacionamiento con la ciudadanía, así como la armonización de las diferentes apuestas e instrumentos de planeación territorial y en especial a la reconciliación, la memoria, la verdad, y la construcción de paz así como el responder a las necesidades expresas de las comunidades en materia de pobreza multidimensional y calidad de vida que permitan disminuir las brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad.

A través de la implementación y el desarrollo de los PDET B-R, y debido a su naturaleza de planeación y gestión, no solamente se está territorializando el punto 1 del AFP y sus respectivos componentes, pues, esta implementación es transversal a los demás puntos del Acuerdo como la Participación Política (Punto 2 del Acuerdo), Fin del Conflicto (Punto 3 del Acuerdo), Solución Al Problema de las Drogas Ilícitas (Punto 4 del Acuerdo) y Víctimas (Punto 5 del Acuerdo).

Los PDET B-R se soportan en un enfoque altamente participativo. Se busca que las poblaciones y comunidades que históricamente han estado marcadas por la exclusión y la vulnerabilidad sean quienes construyan y formulen cada una de las iniciativas que formen parte de los Planes Estratégicos de los PDET B-T. El propósito fundamental del proceso participativo es desatar y movilizar la expresión e incidencia de las comunidades de la de Sumapaz, y de las UPZ focalizadas en Bosa y Ciudad Bolívar, con la intención clara de que cada una de las decisiones y formulaciones que se desprendan de este proceso, cuenten con el concurso y el consentimiento de todas las comunidades focalizadas.

Implementar el AFP en Bogotá supone entonces generar las condiciones para que la Reforma Rural Integral RRI, contemplada en el Punto 1, se materialice en la zona rural más extensa del Distrito, la localidad 20 de Sumapaz, puesto que en el campo es donde se ha gestado gran parte del conflicto armado y donde se requieren transformaciones que contribuyan al fin de éste. Dado que en esta zona rural se concentra gran parte de la pobreza multidimensional y desigualdad, la apuesta Distrital es cambiar las condiciones en la ruralidad, para revertir los efectos del conflicto en el territorio e impedir que éste se repita, así como cerrar las brechas entre la zona urbana y la zona rural de la capital.

Adicionalmente, el Distrito, en su Plan Distrital de Desarrollo, propone una zona prioritariamente urbana para la implementación de PDET B-R, entre Bosa, Ciudad Bolívar en su borde con Soacha (5 UPZ priorizadas). Esta zona alberga a más de 100 mil personas víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado provenientes de todas las regiones del país; además representa la zona con los mayores índices de conflictividad frente a la propiedad, con un número significativo de asentamientos ilegales, y que se ha convertido en uno de los corredores estratégicos para el narcotráfico y micro tráfico de drogas para Bogotá, donde se reporta una mayor presencia de actores ilegales generando desplazamientos forzados intra-urbanos. A su vez, alberga también a un número muy

representativo de excombatientes vinculados a las diferentes estrategias que se han puesto en marcha en materia de desmovilización, reintegración y reincorporación por parte del Estado.

De este proceso de planeación participativa y de formulación de los PDET B-R se obtendrán como resultado los Planes Estratégicos. Estos tendrán una vigencia de 10 años, se estructurarán alrededor de 6 componentes de discusión, se construirán en el marco del proceso de planeación participativa y son los que permitirán gestionar la implementación organizada de las necesidades identificadas, así como el seguimiento según los compromisos establecidos a lo largo del proceso.

Los Planes Estratégicos de los PDET B-R deberán ir acompañados de otros instrumentos e insumos que complementen la fase de planeación participativa y que garanticen su implementación, seguimiento y sostenibilidad. Para esto se ha desarrollado una fase de alistamiento institucional y comunitario, que incluye etapas de construcción participativa de diagnósticos territoriales y mapeo; relacionamiento y preparación de los diferentes actores por medio de diálogos para la participación; así mismo, la definición de fuentes de financiación, armonización de instrumentos de planeación y sus correspondientes rutas; identificación y conformación de unidades territoriales de participación, espacios de encuentro para la construcción y la deliberación de los componentes de los Planes Estratégicos; y la conformación de un mecanismo de seguimiento participativo.

A partir de la formalización de los Planes Estratégicos de los PDET B-R, se da inicio a la fase de implementación.

En este punto es importante precisar que el desarrollo de los PDET B-R se lleva a cabo en cuatro fases:

- 1) Fase de Alistamiento Territorial e Institucional (2020-primer semestre 2021)
- 2) Fase de Planeación Participativa (Segundo semestre 2021-primer semestre 2022)
- 3) Fase de Gestión para la Implementación (2021-2032)
- 4) Fase de Seguimiento Participativo (2022-2032)

1. FASE DE ALISTAMIENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL

a. Alistamiento territorial

La Ruta participativa incluye procesos de identificación, selección y creación de delegaciones para cada uno de los niveles y momentos que la conforman.

Para la puesta en marcha de los PDET B-R se ha realizado un ejercicio de convocatoria y sensibilización en todas las comunidades de los territorios focalizados. Por este motivo, un primer momento del proceso participativo se ha centrado en el desarrollo de un ejercicio de identificación de las comunidades y sus organizaciones, y socialización del proceso que se quiere llevar a cabo, con el fin de realizar una convocatoria amplia en los diferentes niveles que se han creado para la construcción de los PDET B-R.

Así mismo, se ha realizado un esfuerzo significativo por garantizar la participación de sectores de la población que históricamente han estado excluidos de procesos de construcción de desarrollo y bienestar social, especialmente mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y excombatientes en proceso de reincorporación.

Es así como, desde el segundo semestre del 2020 se puso en marcha la estrategia de relacionamiento territorial para los PDET Bogotá-Región que ha permitido el acercamiento con cada uno de los territorios priorizados y sus habitantes, diferentes actores territoriales, organizaciones comunales y comunitarias, gobiernos locales, municipales y regionales, instancias de participación formales y no formales, entre otros.

Esta estrategia territorial busca la promoción y la apropiación de los PDET B-R, la consolidación de la confianza entre las comunidades, las administraciones locales y el Distrito, así como la construcción conjunta de metodologías para la participación comunitaria, la realización de diagnósticos territoriales, y la identificación de inversiones hacia acciones de respuesta rápida en los territorios PDET BR.

Para el caso específico de las víctimas, los PDET B-R tienen un enfoque ampliamente reparador. El enfoque reparador, o enfoque de reparación, es una denominación utilizada en los puntos 5.1.3.3 y 5.1.3.3.1 del AFP para referirse al potencial reparador de las actividades desarrolladas en el marco de los planes y programas de la RRI, incluidos los PDET. Las medidas de reparación establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano (restitución, compensación, indemnización, rehabilitación y satisfacción) pueden ser efectivas en el marco de los PDET B-R, a través de procesos de participación de los beneficiarios y de acciones concretas para su dignificación, así como con elementos de la garantía de no repetición.

De acuerdo con esto, el enfoque reparador reconoce que las víctimas tienen derecho a medidas de diferente índole (asistencia social, reparación individual y colectiva) para la satisfacción de sus derechos a través de acciones de dignificación. El enfoque reparador comprende, entonces, las acciones orientadas a las personas, familiares y sobrevivientes de las víctimas de conflicto armado – incluyendo su tejido social – que impulsen la reconstrucción del proyecto de vida individual, familiar, social y comunitario.

A continuación, se resaltan las principales acciones realizadas:

- 110 encuentros de relacionamiento para socialización y pedagogía de PDET B-R con actores institucionales, comunitarios, ciudadanos y ciudadanas con la participación de aproximadamente 1.500 personas de las cuales 600 pertenecen al ámbito rural y 900 al ámbito urbano. Durante estas actividades de información y diálogo ciudadano se promovieron los liderazgos femeninos con una participación del 44% de mujeres.
- Participación en más de 60 encuentros virtuales con instancias de participación, alcaldías locales y diferentes sectores de la población.
- Identificación de más de 120 actores colectivos territoriales estratégicos entre los que se encuentran: organizaciones de artistas, culturales, ambientales, productivas, gremiales, comunales, de víctimas, de ex combatientes, jóvenes, mujeres, medios

de comunicaciones, comunitarias, barriales así como la academia, el sector educativo, las diferentes instancias de participación de la localidades PDET.

- Estrategia de relacionamiento regional, la cual ha permitido tener un alcance del nivel regional, con trabajo articulado y propuesta de agendas conjuntas con la Gobernación de Cundinamarca, la RAPE, municipio de Soacha y con los 10 municipios de la Provincia de Sumapaz.

De acuerdo con lo anterior, se espera que el fortalecimiento a las diferentes comunidades y organizaciones territoriales redunde en una mayor participación de las mismas en el proceso de formulación de los Planes Estratégicos de los PDET-BR.

b. Alistamiento institucional

Para todo el desarrollo del ejercicio PDET B-R se cuenta con enlaces en las 15 secretarías distritales con las que se han trabajado diferentes procesos de articulación para la formulación e implementación del PDET-BR.

En este sentido, en el marco de la estrategia de gestión intersectorial se han identificado 231 proyectos de inversión del PDD asociados a 681 metas que serán parte de la propuesta técnica que el Grupo de Construcción de Paz presentará tanto a la Secretaría Distrital de Hacienda como a la Secretaría Distrital de Planeación que tiene a su cargo la elaboración de los lineamientos para la formulación del trazador presupuestal de construcción de paz.

De acuerdo con lo anterior, una vez se cuenten con las iniciativas derivadas del proceso de planeación participativa de los PDET-BR se identificarán con los sectores los diferentes recursos de inversión necesarios para la materialización de éstas.

Es importante tener en cuenta que la implementación de los PDET B-R depende de varias entidades, por ello, la ACDVPR ha hecho una caracterización de fuentes de financiación PDET Bogotá-Región, y del componente financiero del *trazador de paz* que se debe aprobar con las Secretarías de Hacienda y Planeación, instrumento con el cual se busca garantizar la armonización y articulación con los instrumentos de presupuesto y de planeación para la identificación de las metas trazadoras, programas estratégicos, proyectos de inversión y los sectores que se involucrarán en el proceso de materialización de las iniciativas que surjan para la implementación de los PDET B-R.

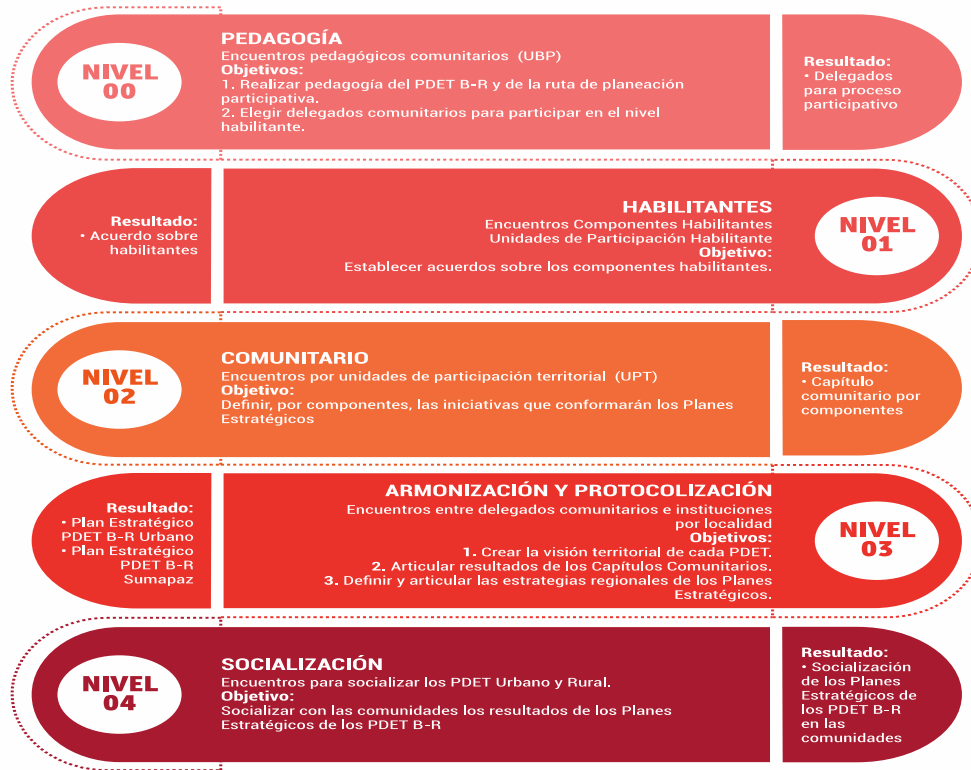
2. FASE DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PDET B-R

Esta fase inició en noviembre del 2021 y se espera culmine en mayo del 2022.

La ruta de planeación participativa es el proceso para la construcción de los Planes Estratégicos de los PDET B-R, en donde se desarrollan momentos participativos con diversos actores de los territorios y, en paralelo, se adelantarán acciones y/o procesos desde la institucionalidad que retroalimentan y constituyen insumos valiosos para el documento final.

La ruta de Planeación participativa se está desarrollando en 5 niveles de participación, cada uno de los cuales cuenta con un objetivo y un resultado esperado. El diálogo y la participación de la institucionalidad con las comunidades está presente en todos los niveles del proceso.

Niveles del Proceso de Planeación Participativa de los PDET B-R



Fuente: ACPVR- Dirección de Paz y Reconciliación 2022.

En este punto, es importante aclarar que el proceso de formulación de los PDET-BR se encuentra en la fase de planeación participativa. En esa medida, desde mediados del mes de noviembre de 2021 se vienen adelantando talleres del nivel 0 y en el mes de diciembre de la misma anualidad se llevaron a cabo los primeros encuentros del nivel 1, que trata de los componentes habilitantes del PDET-BR, a saber: el componente de ordenamiento social del territorio y el componente de seguridad, convivencia y acceso a la justicia local; para el mes de diciembre se dio inicio a las mesas de diálogo para la formulación de las iniciativas respecto a estos dos componentes. En los meses de febrero, marzo y abril de 2022, se está ejecutando el nivel 2 (donde se tratan los componentes de Inclusión social, Inclusión Económica, Ambiente y sostenibilidad y Memoria, paz, reconciliación y reparación integral a las víctimas) y 3 de la fase de planeación participativa y formalizar así los Planes estratégicos, para finalizar con el nivel 4, que se espera ejecutar entre los meses de abril y mayo de esta vigencia. . **Resultados Participación Comunitaria -Ruta Participativa corte 31 de diciembre 2021¹**

¹ El número de víctimas indicado en las fichas de resultados se da por auto reconocimiento de la condición de víctimas del conflicto. Los informes se actualizan trimestralmente, por lo cual la información para vigencia 2022 está en construcción.

PDET-BR NIVELES

0 Y 1

TOTAL

PARTICIPANTES:

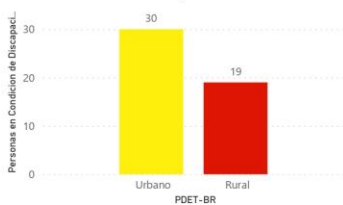
554

NÚMERO DE
SESIONES:

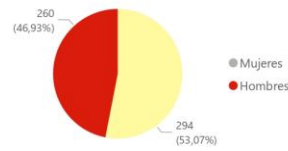
19



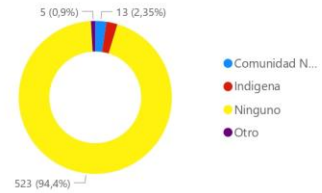
Participación Comunitaria Personas en Condición de Discapacidad



Participación Comunitaria por Sexo

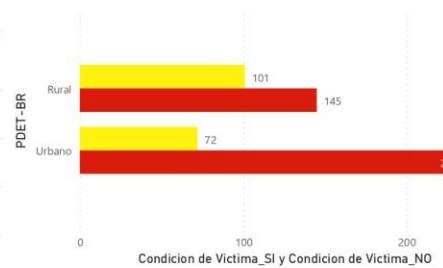


Participación Comunitaria por Autoreconocimiento Étnico



Participación Comunitaria Víctimas del Conflicto Amado

Condición de Víctima_SI Condición de Víctima_NO



Fuente: ACPVR- Dirección de Paz y Reconciliación

PDET BR - Sumapaz

PDET SUMAPAZ

TOTAL
PARTICIPANTES:

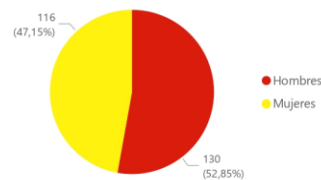
246

NÚMERO DE
SESIONES:

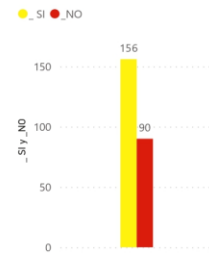
9



Participación Comunitaria por Sexo

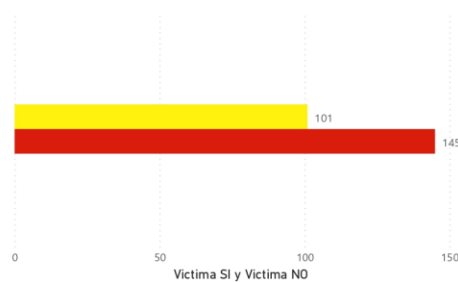


Líder/Lideresa Comunitario

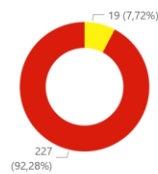


Participación Comunitaria Víctimas del Conflicto Amado

Víctima SI Víctima NO

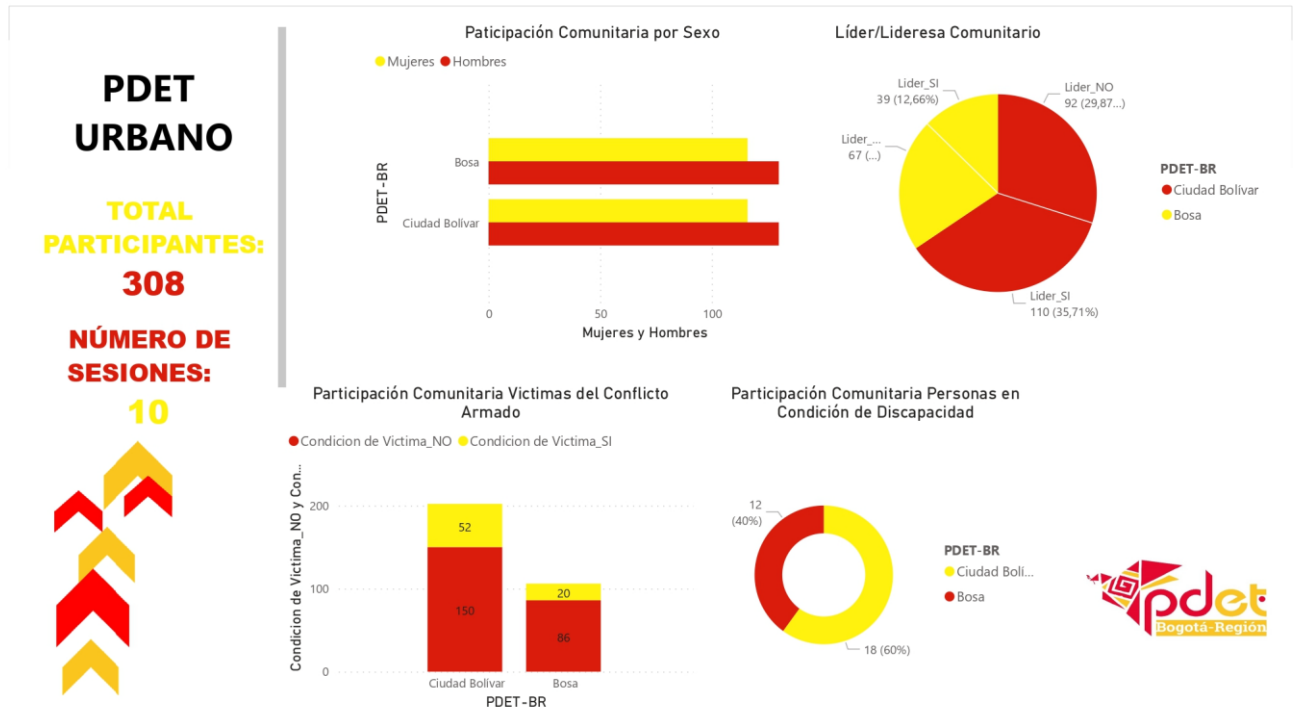


Participación Comunitaria Personas en Condición de Discapacidad



Fuente: ACPVR- Dirección de Paz y Reconciliación

PDET BR Bosa CB Borde



Fuente: ACPVR- Dirección de Paz y Reconciliación

3. FASE DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN y 4. FASE DE SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO

Para el ejercicio de la articulación institucional, el artículo 54 del PDD, establece la creación de una Mesa Intersectorial, bajo la secretaría técnica de la ACPVR, para el seguimiento de la implementación del PDET B-R y de los componentes relacionados con la reincorporación efectiva de excombatientes, en la cual participarán diferentes entidades distritales con competencia en el tema, y se podrá convocar a entidades del orden nacional en los temas que se requieran, para la mejor articulación de acciones en el territorio.

En el marco de esta Mesa Intersectorial se desarrollará toda la fase de gestión para la implementación de los PDET B-R, en donde participarán las diferentes entidades del distrito (tanto del nivel central como del nivel descentralizado) que tienen a su cargo, a través de sus diferentes programas y proyectos, las competencias para implementar las potenciales iniciativas que resulten del proceso de planeación participativa de los PDET-BR, en cada uno de sus componentes.

Ahora bien, a pesar de que la fase de planeación participativa aún no se ha llevado a cabo, durante el primer semestre del 2021, se trabajó mancomunadamente entre la ACPVR y otros sectores del Distrito para formular o madurar proyectos de inversión que respondieran a necesidades expresas de las comunidades del de los territorios PDET BR, en especial en Sumapaz, con posibilidad de ser presentados en las fuentes de financiación de SGR ya sea por asignaciones directas como Fondo de Desarrollo Regional o por parte del Órgano

Colegiado de administración y Decisión -OCAD PAZ, con del Sistema General de Regalías -SGR.

En este sentido, el Decreto 234 de 2021 incluye 4 proyectos de inversión para los territorios PDET B-R, en su versión rural y urbana, a decir: proyecto de conectividad, proyecto de fortalecimiento de acueductos rurales, proyecto de fortalecimiento de las prácticas productivas hacia la sostenibilidad ambiental y proyecto de mejoramiento integral de barrios, en la localidad de Ciudad Bolívar. Estos proyectos armonizarán en la fase participativa para capitalizar su implementación.

ANEXOS:

- Anexo 1. Informe de medición de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado Localizadas en Bogotá– 2020
- Anexo 2. Boletín Trimestral de Víctimas (Abril-Mayo-Junio)
- Anexo 3. Boletín Víctimas Bogotá – Octubre 2020
- Anexo 4. Informe Anual del Gobierno Nacional 2018, UARIV, pp. 610
- Anexo 5. Informe de medición de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos – Marzo 2021)
- Anexo 6. Aprobación Plan de mejoramiento – POSI
- Anexo 7. Matriz plan de mejoramiento POSI (Plan operativo de sistemas de información.
- Anexo 8. PAD Plan de Acción Distrital 2021
- Anexo 9. Plan de Acción Distrital 2020 – 2024
- Anexo 10. Plan de Acción Distrital 2021
- Anexo 11. Plan de Acción Distrital 2022
- Anexo 12. Fases y Plan para caracterización Parque Nacional.

Esperamos de esta forma haber atendido íntegramente su solicitud. La ACPVR queda atenta a cualquier inquietud.

Atentamente,



CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA
ALTO CONSEJERO DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN

Proyectó: Luisa Daniela Rodríguez Salas/Juan Manuel Patiño/Mauricio Tellez /Juan David Santamaria

Aprobó: Jennyfert Johana Martínez Aranda